

JOAQUIN CORTAZAR, Gobernador interino del Estado libre y soberano de Chihuahua, á sus habitantes, sabed:

Que el Congreso Constitucional del Estado, ha tenido á bien decretar lo que sigue:

El Congreso Constitucional del Estado de Chihuahua, ha decretado el siguiente

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

TITULO PRELIMINAR

BASES GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL

ART. 1º.—La facultad de declarar si un hecho ú omisión está reconocido por las leyes penales del Estado como delito, y si las personas á quienes se imputa son inocentes ó culpables, á fin de absolver ó condenar, corresponde á los tribunales de justicia del Estado, cuya declaración se tendrá como única verdad legal.

ART. 2º.—La violación de los derechos que garantiza la ley penal da lugar á dos acciones: la penal y la civil. La primera, que tiene por objeto el castigo del delincuente, puede ejercitarse en los delitos públicos por la sociedad y los ofendidos, y exclusivamente por estos en los delitos privados; la segunda, que solo puede ejercitar la parte ofendida ó su representante legítimo, no tiene más objetos que los que expresa el libro II del Código Penal.

ART. 3º.—La acción penal se extingue por los medios y en la forma que determina el Código Penal.

ART. 4º.—La acción civil se extingue por los mismos medios que se extinguen las obligaciones civiles, con las limitaciones que establece el Código Penal; pero la extinción de aquella no importa la de la acción penal.

ART. 5º.—La acción civil puede intentarse por y contra las personas que determina el Código Penal.

ART. 6º.—Ni la sentencia irrevocable sobre la acción penal, aunque sea absolutoria, ni el indulto extinguen la acción civil, á menos que aquella se hubiere fundado en una de las tres circunstancias siguientes:

- I. Que el acusado obró con derecho.
- II. Que no tuvo participio alguno en el hecho ú omisión que se le imputa.
- III. Que ese hecho ú omisión no han existido.

La amnistía solo extingue la acción civil en el caso del 2º inciso del artículo 343 del Código Penal.

ART. 7º.—Ninguna persona podrá ser juzgada ni sentenciada por los delitos y faltas de que habla el Código Penal, sin ser previamente oída en juicio en la forma que este Código establece y por las autoridades que, según el mismo, sean competentes.

ART. 8º.—Las faltas que mencionan los capítulos II, III, IV y V del libro IV del Código Penal, en los casos en que no sean punibles por la autoridad judicial, y las que enumeren los reglamentos de policía y buen gobierno expedidos por las asambleas municipales, se castigarán gubernativamente por los jefes políticos, presidentes municipales y de sección municipal, conforme á las facultades que les confiere la ley orgánica de los distritos del Estado, y procediendo según las prescripciones del Título 2º de este Código.

ART. 9º.—Todos los habitantes del Estado, sean naturales ó extranjeros, quedan sujetos á las prescripciones de este Código, salvo las excepciones establecidas en las leyes especiales y en los tratados con las naciones extranjeras, y las reconocidas por el derecho internacional respecto de los agentes diplomáticos.

TITULO PRIMERO

DE LA POLICIA JUDICIAL, DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN JUDICIAL
Y DE SU COMPETENCIA

CAPITULO I

De la policía judicial

ART. 10.—La policía judicial tiene por objeto la investigación, preliminar á la instrucción ó sumario, de los delitos

ó faltas, la reunión de sus pruebas y el descubrimiento de sus autores, cómplices y encubridores.

ART. 11.—La policía judicial se ejerce:

- I. Por los jefes políticos de los distritos.
- II. Por los presidentes municipales, de sección municipal y comisarios.
- III. Por los jefes de las fuerzas de seguridad pública y de la policía rural.
- IV. Por los inspectores de cuarteles y jefes de manzanas.
- V. Por los auxiliares de los pueblos.
- VI. Por los jefes é individuos de la gendarmería, diurna y nocturna.
- VII. Por los jefes de establecimientos penales y alcaides de las cárceles.

VIII. Por los demás agentes que nombren las autoridades administrativas, que tengan facultad para ello.

ART. 12.—Será obligación de todos los agentes de la policía judicial, luego que tuvieren noticia de la comisión de un delito, reunir las pruebas que acrediten su perpetración, averiguar quiénes son los delincuentes y recoger, para ponerlos á disposición de la autoridad judicial, todos los efectos ó instrumentos del delito, de cuya desaparición hubiere peligro. La expresada obligación comprende también los delitos que solo pueden perseguirse á instancia de parte legítima, si al efecto fueren por ella requeridos los agentes de la policía judicial.

ART. 13.—Inmediatamente que los agentes de la policía judicial procedan á practicar las diligencias de que habla el artículo anterior, darán aviso al juez de primera instancia, menor ó de paz según los casos.

ART. 14.—Los agentes de la policía judicial, en el caso de delito infragante, aprehenderán á los delincuentes y podrán impedir que se aparten del lugar las personas que en él se encuentren, mientras se practiquen las diligencias que estimen indispensables.

Podrán también detener los efectos que en el mismo lugar del suceso hubiere, ínterin llega la autoridad judicial, siempre que exista peligro de que no haciéndolo desaparecieran algunas pruebas de los hechos ocurridos. Asimismo podrán en el propio caso, con igual razón, hacer comparecer ó conducir inmediatamente ante el juez, las personas y efectos

indicados.—Cuando se trate de lesiones proporcionarán ó permitirán que se presten á los heridos los auxilios indispensables, mientras se presentan los facultativos y el juez, trasladándolos si fuere necesario á lugar adecuado para que sean atendidos.

ART. 15.—Las autoridades de que trata este capítulo no podrán penetrar á las casas de habitación, lugares cerrados ó edificios públicos, sino por orden escrita del juez del ramo penal ó de la autoridad á quien la ley confiera expresamente esta facultad, salvo cuando se trate de la persecución de un delito infragante ó cuando sean llamados por alguno de los habitantes de la casa, edificio público ó lugar cerrado.

ART. 16.—Se llama delito infragante el que se está cometiendo ó se acaba de cometer, siempre que en este último caso exista una conexión inmediata y notoria entre las circunstancias y vestigios del hecho y las circunstancias, objetos ó señales que se encuentren en el supuesto autor, cómplice ó encubridor, ó en el sitio á que se trate de penetrar, si se persiguió al responsable desde el momento que consumó el delito.

ART. 17.—Concurriendo simultáneamente varios agentes para practicar la averiguación, tendrá preferencia el de categoría superior, según el orden que establece el artículo 11; y si fueren de igual categoría, el que hubiere prevenido.

ART. 18.—Cuando el juez de primera instancia, menor ó de paz se presentaren á formar las primeras diligencias de la instrucción criminal, cesarán las que estuvieren practicando los agentes de policía, quienes en el acto pondrán á disposición del juez á los detenidos que hubieren aprehendido, dándole la relación de que tratan los artículos 19 y 20.

ART. 19.—Los mencionados agentes extenderán una relación escrita de las diligencias que practiquen, especificando en ella, con la mayor exactitud, los hechos por ellos averiguados, las declaraciones é informes recibidos y cuantas circunstancias hubieren observado y pudieren ser prueba ó indicio del delito.

Dicha relación será firmada por el agente que la hubiere extendido, y si usare sello lo estampará en todas las fojas.

ART. 20.—Si el agente á quien corresponda no pudiere hacer la relación escrita, la hará verbal y circunstanciada, según los casos, ante los jueces respectivos, quienes

la reducirán á escrito de un modo fehaciente, haciendo constar el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria.

ART. 21.—Las relaciones de que hablan los dos artículos anteriores, se considerarán como denuncias.

ART. 22.—Los agentes de policía tienen obligación de dar á la autoridad judicial, dentro de veinticuatro horas á más tardar, la relación de que tratan los artículos 19 y 20, consignando á los detenidos y efectos recogidos.

ART. 23.—Los mismos agentes tienen facultades de requerir el auxilio de la fuerza armada, cuando lo juzguen conveniente para el ejercicio de sus funciones.

ART. 24.—Los encargados de la policía dependen, en el ejercicio de esta, de los jueces de primera instancia, menores y de paz, sin perjuicio de las obligaciones que algunos de ellos tengan en los ramos administrativo y militar.

CAPITULO II

De las autoridades del orden judicial y de su competencia

ART. 25.—La justicia penal se administrará:

I. Por los jueces de paz.

II. Por los menores.

III. Por los jueces de primera instancia.

IV. Por el Supremo Tribunal de Justicia y sus Salas.

V. Por los jurados de responsabilidad oficial.

ART. 26.—Los jueces de paz conocerán:

I. De las faltas y delitos que se castigan con estrañamiento, apercibimiento, multa de primera clase ó arresto menor.

II. De las primeras diligencias en las causas criminales por delitos cometidos en el lugar de su jurisdicción, que no sean de su competencia, aprehendiendo á los reos y remitiéndolos al respectivo juez con aquellas.

III. De los casos en que deba exigirse la caución de no ofender y la protesta de buena conducta, conforme á las leyes.

IV. De las demás diligencias que les encomienden sus superiores.

ART. 27.—Los jueces menores conocerán:

I. De los delitos y faltas que se castiguen con arresto

mayor ó reclusión en establecimiento de corrección penal equivalente al arresto expresado, y multa cuyo máximo no exceda de trescientos pesos.

II. De las competencias de jurisdicción entre los jueces de paz de su respectiva municipalidad, y excusas ó recusaciones de los mismos.

III. De los casos en que proceda la caución de no ofender, protesta de buena conducta, corrección disciplinaria que no exceda de cinco días de arresto, amonestación, reclusión correccional, sujeción á la vigilancia de la autoridad política y multa hasta de veinticinco pesos.

IV. De las primeras diligencias en los delitos de la competencia de los jueces de primera instancia, en los lugares donde no hubiere estos; aprehendiendo á los delincuentes, dictando las providencias necesarias hasta el auto de prisión y practicando las demás diligencias que les encomienden los superiores.

V. De las excusas y recusaciones de sus secretarios.

VI. De las demás diligencias en que deban intervenir conforme á las leyes federales y del Estado.

ART. 28.—Para determinar la competencia de los jueces menores se observarán las reglas siguientes:

I. Si el Código Penal no señala el término medio de la pena sino el mínimo y el máximo, y este excediere de la que pueden imponer los menores, serán competentes los de primera instancia.

II. En caso de que haya de acumularse á un delito una ó más faltas, conocerá de ambos el juez menor si es competente para conocer del delito, aun cuando por virtud de la acumulación resulte una pena mayor que la de once meses de arresto.

III. Lo mismo se observará en caso de acumulación de varios delitos, siempre que el juez menor sea competente para conocer del más grave, ó sea el que se castiga con mayor pena.

ART. 29.—Corresponde á los jueces de primera instancia:

I. Conocer en los procesos que no sean de la competencia de los jueces de paz, ni de los menores, exceptuándose los casos cuyo conocimiento esté cometido por la ley á los jurados especiales.

II. Conocer de las apelaciones que se interpusieren contra sentencias ó autos dictados por jueces menores, en los casos en que procedan esos recursos.

III. Revisar de oficio los procesos que sentencien los jueces menores siempre que, siendo apelables las sentencias, no se hubiere interpuesto el recurso de apelación, ó que promovido se hubiere negado y no se interpusiere el de denegada apelación.

IV. Revisar de oficio los autos de suspensión del procedimiento, libertad bajo fianza ó protesta, y sobreseimiento, dictados por los jueces menores.

V. Dirimir las competencias entre los jueces menores de su respectivo distrito, entre estos y los de paz, y entre estos últimos cuya competencia no corresponda dirimir á los jueces menores.

VI. Calificar las inhibiciones por excusa ó recusación de su respectivo secretario, y las de los jueces menores.

VII. Imponer correcciones disciplinarias que no excedan de diez días de arresto ó cincuenta pesos de multa.

VIII. Practicar las demás diligencias que les correspondan, conforme á las leyes federales ó del Estado.

ART. 30.—Corresponde á las Salas de apelación y revisión del Supremo Tribunal de Justicia:

I. Conocer de las apelaciones que se interpusieren contra sentencias ó autos dictados por jueces de primera instancia, en los casos en que procedan esos recursos.

II. Revisar de oficio los procesos en que sentencien los jueces de primera instancia siempre que, siendo apelables las sentencias, no se hubiere interpuesto este recurso, ó que promovido se hubiere negado y no se interpusiese el de denegada apelación.

III. Revisar de oficio los autos de suspensión del procedimiento, libertad bajo fianza ó protesta, y sobreseimiento, dictados por los jueces de primera instancia.

IV. Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre las autoridades judiciales del Estado, y de que no deban conocer los jueces menores, los de primera instancia, ni la Sala de Casación.

V. Calificar las recusaciones y excusas de sus secretarios, de los jueces de primera instancia y asesores necesarios,

rios, y las excusas del Ministerio Público en los procesos en que este intervenga ante la Sala.

VI. Conocer en primera instancia de las causas instruidas por delitos oficiales contra los jueces de primera instancia y menores, jefes políticos, agentes del Ministerio Público y notarios.

VII. Imponer correcciones disciplinarias conforme á las leyes, y desempeñar las demás atribuciones que estas les concedan.

ART. 31.—Corresponde á la Sala de Casación:

I. Conocer de los recursos de casación y denegada casación.

II. Dirimir las competencias que se susciten entre las Salas de apelación y entre estas y las demás autoridades judiciales del Estado.

III. Calificar las excusas ó recusaciones de los magistrados del Tribunal, y las excusas del Ministerio Público en los procesos en que este intervenga ante la Sala.

IV. Conocer en segunda instancia de los procesos en que las Salas de apelación y revisión hayan conocido en primera.

V. Informar al Gobierno en los casos de indulto, reducción y conmutación de pena.

VI. Imponer correcciones disciplinarias conforme á las leyes.

VII. Desempeñar las demás atribuciones que las leyes le señalen.

TITULO SEGUNDO

DE LA FORMA DEL PROCEDIMIENTO PARA CASTIGAR LAS FALTAS

ART. 32.—Corresponde á las autoridades administrativas la aplicación de penas correccionales por infracción de leyes, bandos ó reglamentos en materia de policía y buen gobierno; pero sujetándose á las reglas siguientes:

I. Solo puede imponer la pena el funcionario ó autoridad á quien la ley, bando ó reglamento diere esa facultad. Si no la concediere expresamente á determinado funcionario, se entenderá que puede usar de ella aquel á quien, conforme á las leyes administrativas, corresponda el cuidado inmediato del ramo de que se trate.

II. Solo pueden imponerse á los infractores de las leyes,

bandos ó reglamentos en materia de policía, las penas que señalen estos ó el libro cuarto del Código Penal.

III. En todo caso de imposición de penas por las autoridades políticas ó administrativas, se harán constar por escrito, en un libro ó registro, el nombre del penado y el de su aprehensor, la falta cometida, la pena que se le imponga y su fundamento legal.

ART. 33.—Toda pena impuesta por alguna autoridad administrativa será revisable por su superior gerárquico, si fuere reclamada por el penado y excediere de la cuarta parte del máximo de la que puede imponer aquella.

ART. 34.—Al margen de cada anotación se hará constar el cumplimiento ó la extinción de la pena.

ART. 35.—El importe de las multas impuestas por las autoridades administrativas ingresará forzosamente á los fondos del respectivo municipio.

ART. 36.—Cuando la falta hubiere causado perjuicio de tercero y este pretenda exigir la responsabilidad civil que le corresponda, ocurrirá á deducir su acción ante el juez competente.

ART. 37.—Luego que la autoridad política ó municipal encuentre que el daño causado por una falta excede de veinticinco pesos, se inhibirá del conocimiento de ella y hará la consignación á la autoridad judicial que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1046 del Código Penal.

TITULO TERCERO

DISPOSICIONES GENERALES PARA TODOS LOS JUICIOS

CAPITULO I

De las formalidades judiciales

ART. 38.—No se practicarán más diligencias que las conducentes á la averiguación de los hechos relativos al proceso.

ART.—39.—En las causas criminales pueden los jueces actuar de noche y en los días feriados, cuando el caso lo exija, sin necesidad de auto en forma que habilite el día ó la hora.

ART. 40.—Una vez que en el proceso haya dictado sentencia el juez, no podrá fallar de nuevo ni dictar auto de sobreseimiento respecto de las mismas personas, aunque en vir-